JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C. Abril veintiocho de dos mil veintiuno.

TUTELA No. 1100131030272021-00161-00 de CARLOS ANDRES QUIROZ JIMENEZ contra JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL.

Procede el Despacho a decidir la presente acción de tutela con el siguiente estudio:

ANTECEDENTES :

LA ACCION Y EL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

El señor CARLOS ANDRES QUIROZ JIMENEZ, acude a esta judicatura en causa propia, para que le sean tutelados los derechos fundamentales al debido proceso, y a una pronta administración de justicia que considera el accionante fueron vulnerados por el Juzgado aquí accionado.

La tutela se fundamenta en hechos que se sintetizan, así: Que El 10 de junio de 2011 se radico demanda en su contra y correspondió conocer de ella al juzgado 35 civil municipal con el Numero de radicado 2011-794 esto por una deuda que tuvo con la Cooperativa Jurispres SAS. Que Por auto librado el 12 de julio de 2011 se ordeno mandamiento de pago. En agosto del mismo año se ordenaron los embargos incluido dentro de ellos el embargo de su sueldo, y se hicieron los respectivos oficios el 29 de septiembre del año 2011.

Señala que Por inactividad del proceso y luego de haber sido requerida debidamente la parte actora el juzgado por auto de fecha 19 de diciembre de 2012 decreta la terminación del proceso por Desistimiento Tácito y la cancelación de las medidas cautelares. El proceso es archivado el 15 de abril de 2013 en el paquete 155 y por gestiones realizadas por parte de el se desarchivo el proceso y es así como en el mes de agosto de 2020 regresa nuevamente el proceso al juzgado, y con una anotación del día 23 de noviembre del mismo año cuando ni siquiera ha pasado un tiempo prudencial el juzgado nuevamente hace anotación de archivo del proceso.

Que Por poder que otorgo a su abogado para que lo representara y realizara el tramite en su nombre el día 14 de enero del

año en curso radico el poder mencionado para representarlo y solicitud de entrega y cancelación de los títulos existentes para este proceso a su favor. A la fecha el Juzgado ni siquiera ha realizado la recepción del poder y el memorial presentado por su abogado desde el mes de enero de este año.

Señala que Al ver que el juzgado no daba tramite a la solicitud radicada se le envió de nuevo un memorial solicitando dar tramite y el juzgado contesto mediante correo diciendo que el proceso se encuentra archivado y que es necesario pagar nuevamente el desarchive, cosa con la cual no tiene ningún problema sino fuera porque esto demora mas de un año para que por parte de la oficina de Archivo central dejen nuevamente el expediente a disposición en el juzgado.

Dice que con esa actitud del Juzgado se le están violando sus derechos ya que no le han resuelto lo pedido.

Solicita que a través de este mecanismo Se sirva conceder y amparar el derecho que tiene al debido proceso e igualmente el derecho que la constitución Nacional le otorga para acudir a una pronta administración de justicia. Y ordenar al juzgado 35 civil municipal de Bogotá que de manera inmediata proceda a resolver lo solicitado ordenando la entrega y cancelación de los títulos existentes a su favor, toda vez, que el proceso fue terminado por Desistimiento Tácito desde hace mas de ocho años.

TRAMITE PROCESAL

Por auto de 23 de abril de 2021, se admitió la acción de tutela requiriendo a la parte accionada para que en el término de dos días se pronunciaran sobre los hechos y circunstancias que motivaron la acción constitucional y enviaran lo pertinente sobre el proceso al cual refiere la misma.

CONTESTACION DE LA PARTE ACCIONADA

JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL.

A través del correo electrónico se recibe la respuesta donde indica que en lo relacionado al proceso que alude en el escrito de tutela, se advierte que efectivamente en el presente estrado judicial cursó proceso de Ejecutivo con radicado No. 2011-0794 que JURISPRES S.A.S. adelantó contra el hoy accionante. Ahora bien, en el referido expediente luego de decretarse la terminación por desistimiento tácito el 19 de diciembre de 2012, se dispuso el archivo del expediente el 15 de abril de 2013. Posteriormente, ante solicitud de

la parte se desarchivo el proceso de la referencia el pasado 18 de agosto de 2020, sin que se hubiese formulado petición alguna de las partes al interior del plenario, por lo que el 23 de noviembre del año anterior, se volvió a archivar el mentado proceso.

Señala que la inconformidad del accionante es porque se volvió a archivar el expediente No. 2011-0794, situación frente a la cual ha de destacarse que no existe un tiempo establecido para que se surta tal proceder, y que se procedió de forma discrecional al haber transcurridos 3 meses desde el desarchivo del proceso, sin que se hubiese recibido solicitud alguna, por lo que se considera que con el proceder del despacho no se ha vulnerado derecho fundamental alguno.

Manifiesta que por medio de la secretaría del despacho se librara oficio con destino a Archivo Central, para que se sirvan desarchivar y remitir el precitado expediente, precisando que en la fecha se emitió auto donde se reconoce personería al apoderado del ejecutado y que una vez se haya desarchivado el expediente, se resolverá sobre la entrega de títulos.

Como se indico en esa respuesta que el accionante ya había presentado otra tutela por lo mismo que se tramito en el Juzgado 12 Civil del Circuito, este Despacho libro oficio a dicho Juzgado para que diera informe sobre esa tutela.

EL JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO

Indica que con el número de radicación indicado se encontró una tutela de OMAR MORA CRISTANCHO vs FONDO NACIONAL DEL AHORRO. Por lo que las partes no coinciden.

CONSIDERACIONES:

De la Acción:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Competencia y Procedencia:

Es competente este Juzgado con fundamento en el Decreto 1382 de 2000.

Del caso Concreto:

Concorre a esta judicatura el señor CARLOS ANDRES QUIROZ JIMENEZ para solicitar se ordene al juzgado 35 civil municipal de Bogotá que de manera inmediata proceda a resolver lo solicitado ordenando la entrega y cancelación de los títulos existentes a su favor, toda vez, que el proceso fue terminado por Desistimiento Tácito desde hace mas de ocho años.

Teniendo en cuenta los derechos que indica el accionante como vulnerados y con respecto al Derecho del Debido proceso, en las actuaciones judiciales, exige que todo procedimiento previsto en la ley, se adecue a las reglas básicas derivadas del artículo 29 de la Constitución, tales como la existencia de un proceso público sin dilaciones injustificadas, con la oportunidad de refutar e impugnar las decisiones, en donde se garantice el derecho de defensa y se puedan presentar y controvertir pruebas, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de los sujetos procesales y de alterar las reglas mínimas de convivencia social fundadas en los postulados del Estado social de derecho .

El artículo 29 de la Constitución consagra el derecho al debido proceso, que se entiende como “la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables”. Tal derecho, siendo de aplicación general y universal “constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico”.

Con respecto al *derecho fundamental de **acceso a la administración de justicia*** se encuentra consagrado en el artículo 229 de la norma superior en los siguientes términos: *Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la*

debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley. Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales, ya que, como ha señalado la alta Corporación “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”. Por consiguiente, el derecho de acceso a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos.

Teniendo en cuenta lo pedido en tutela, y la respuesta dada por el Juzgado 35 Civil Municipal el amparo solicitado debe negarse por lo siguiente:

El proceso 2011-0794 se encontraba archivado y por petición del interesado se desarchivo el 18 de agosto de 2020 y permaneció tres meses en secretaría sin que las partes presentaran petición alguna, por lo que volvió al archivo en noviembre 23 de 2020. Con este actuar del Juzgado no se vulnera ningún derecho al accionante, puesto que si a un proceso se le ordeno el archivo debe ir al archivo.

No hay lugar a conceder la tutela ya que el Juzgado en su respuesta manifiesta que le hizo el reconocimiento de personería a la parte demandada, que enviara oficio para el desarchive del proceso y que una vez se encuentre desarchivado se resolverá sobre la entrega de títulos.

Las anteriores razones son suficientes para negar la tutela impetrada, por cuanto no hay vulneración a los derechos fundamentales del accionante.

Por lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C. Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales solicitado por CARLOS ANDRES QUIROZ JIMENEZ contra EL JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA.

Se desvincula al Juzgado 12 Civil del Circuito.

Segundo: Notifíquese a las partes por el medio mas expedito.

Tercero: Envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión en caso de no ser impugnado.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La Juez.

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS

JUEZ

**JUEZ - JUZGADO 027 DE CIRCUITO CIVIL ESCRITURAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA
D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d756db94a7328feb1f10ccc239891ae0382a2eb604b7ad7b92f908383e71e0a5**